

EL RENACER DE LA DEMOCRACIA EN PERÚ

5

ALDO OLANO ALOR

Docente e Investigador
Facultad de Finanzas, Gobierno y
Relaciones Internacionales - FIGRI
Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE
Universidad Externado de Colombia

5

El régimen del presidente peruano Alberto Fujimori llegó a su fin en 2001, en medio de escándalos que hicieron públicas las prácticas de corrupción y abusos de poder que lo sostuvieron durante una década. Perú experimentó una transición democrática hacia un nuevo gobierno en el que se centran muchas esperanzas pero también muchas dudas. Este proceso tuvo como motor principal la participación permanente y decidida de una sociedad civil que estuvo silenciada durante casi una década.

CONTENIDO

Introducción: "Ahora es nuestra hora"	165
I. El derrumbe de la dictadura	166
II. Los antecedentes de la (re) reelección	169
III. Adelante con el "Plan B"	175
IV. Posesión y fuga presidencial	178
V. Las medidas del gobierno de transición	182
VI. Elecciones 2001: el temor de una vuelta al pasado	187
VII. La campaña y los resultados	189
VIII. Los desafíos para la democracia en Perú	194
Bibliografía	197

Introducción

Luego de haber realizado cuatro elecciones presidenciales entre abril de 2000 y junio de 2001, de tener un gobierno de origen fraudulento, otro transitorio elegido por el legislativo y haber cambiado casi por entero a los integrantes de un Congreso que estuvo subordinado al gobierno autoritario, Perú, desde el 28 de julio último, cuenta con un gobernante democráticamente elegido. Alejandro Toledo, conocido de manera popular como el "Cholo", se ha hecho cargo de la Presidencia luego de una acelerada y, por momentos, tensa campaña electoral. El nuevo presidente ha asumido el mando generando expectativas positivas en la mayoría de la población. No obstante, al mismo tiempo, un importante sector de la ciudadanía mira con desconfianza el gobierno que se inicia. El apoyo internacional se ha manifestado sin reservas y a banca multilateral, tal como lo hizo con Alberto Fujimori a inicios de la década del noventa, muestra su interés por la pronta recuperación del país.

Lo resumido líneas arriba induce a analizar el reciente proceso electoral, pero conforme se ahonda en el estudio de los acontecimientos que precedieron al triunfo de Toledo, muchos elementos aparecen como parte de un pasado reciente que se hace necesario también estudiar. Lo anterior implica explicar las causas que hicieron posible el derrumbe de la dictadura de Alberto Fujimori y su reemplazo por un gobierno transitorio conducido por el presidente del Congreso Nacional, Valentín Paniagua. Un detallado análisis de los años en los cuales se conformó el fraude electoral con el cual Fujimori intentó perpetuarse en el poder, será quizás el elemento fundamental para entender por qué a mediados de septiembre de 2000, la situación del gobierno se volvió insostenible luego de la difusión del video en el que se retrataba al Asesor Presidencial en Cuestiones de Seguridad e Inteligencia, Vladimiro Montesinos, sobornando a un congresista de la oposición.

Ahora bien, aunque es cierto que una serie de factores se conjugaron para el derrumbe por colapso del régimen autoritario, hubo un elemento fundamental

¹ Cholo en el imaginario simbólico peruano representa a los inmigrantes provenientes de la sierra, distinguidos por el color cobrizo de la piel y de facciones indígenas, los cuales se han constituido en integrantes de las clases populares urbanas y en algunos casos prósperos ciudadanos.

en la historia reciente de Perú que permite explicar la salida de la dictadura: la permanente oposición cívica y democrática, el resurgir de los movimientos sociales luego de un paréntesis bastante largo, que se constituyó en el principal elemento para la caída del régimen fujimorista. Sin la movilización de los jóvenes estudiantes, trabajadores y demás integrantes de la sociedad civil que cuestionaban el orden autoritario, no hubiera sido posible la reinstauración del régimen democrático que disfruta Perú nuevamente. A esto se sumó la incansable labor de los partidos políticos democráticos que, haciendo de la necesidad virtud, abandonaron transitoriamente las diferencias y, de manera consensual, emprendieron la lucha antidictatorial bajo el liderazgo de Alejandro Toledo. Quizá estos dos elementos ayuden a entender por qué se hace imperioso repensar en lo necesarias que son la sociedad civil y política para que la democracia sobreviva a los embates de actores e idearios autoritarios.

I. El derrumbe de la dictadura

El ingeniero Alberto Fujimori asumió el gobierno de Perú por tercera vez el 28 de julio de 2000, en una elección calificada en su discurso de posesión como "legal y legítima". Sin embargo, tan sólo 50 días después, el 16 de septiembre, decidió reducir su mandato al término de 1 año, convocar a elecciones generales y dirigir un proceso de transición que debía culminar en julio de 2001. Un porcentaje mayoritario de la población aprobó la decisión presidencial y la oposición al, hasta entonces, irreductible Fujimori, celebró en las calles limeñas la salida anticipada del "chino". En ese mensaje también anunció la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, dirigido en la sombra por su entonces socio en distintas actividades políticas y económicas, Vladimiro Montesinos Torres, ahora reo de la justicia peruana. El 19 de noviembre de 2000, Fujimori anunció desde Japón su renuncia a la presidencia y, días después, fue destituido por el Congreso Nacional.

Vladimiro Montesinos Torres, el más importante asesor que tuvo Fujimori durante sus 10 años de gobierno y organizador del SIN, la policía secreta del régimen, huyó

² Servicio de Inteligencia Nacional

del país en la tercera semana de septiembre y transitoriamente se refugió en Panamá, paraíso financiero y centro de reclusión negociada de golpistas, tales como el haitiano Raoul Cedras y el expresidente de Guatemala Jorge Serrano. La presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, a pesar de oponerse inicialmente a la presencia de Montesinos en su país y a su solicitud de asilo político, terminó aceptando la propuesta hecha por el Secretario General de la OEA, César Gaviria, y distintos presidentes latinoamericanos, de que lo recibiera, ya que la salida de este polémico personaje "coadyuvaría al restablecimiento de la democracia en el Perú". Cuando Montesinos se enteró de un operativo que la DEA estaba organizando para detenerlo, regresó al Perú donde permaneció durante casi un mes, gozando de la protección dada por algunos miembros de las Fuerzas Armadas. A comienzos de noviembre volvió a fugarse, pero esta vez hacia un destino que, pensaba, era seguro: Venezuela. Detenido en junio pasado, es posible que pase el resto de sus días en la cárcel.

El papel que jugaron las Fuerzas Armadas de Perú mostró hasta dónde estuvieron comprometidos con el régimen de Fujimori y Montesinos. Por un lado, cerraron filas alrededor del asesor presidencial y lograron sacarlo del país, en medio de la tormenta política desatada por las ilícitas actividades que se iban descubriendo, las cuales comprometían directamente a las altas esferas del gobierno. De inmediato, los mandos militares juraron completa lealtad a su "Comandante Supremo", es decir el Presidente, y trataron de involucrarse en el proceso de transición que dirigiría el, desde entonces, prófugo ciudadano japonés. Pese a que lograron impedir la caída de Fujimori en los momentos iniciales de la crisis, no consiguieron hacer lo mismo en noviembre de 2000.

Este absurdo accionar tuvo el efecto contrario pues permitió mostrar las fisuras existentes al interior de los institutos armados, debidas a la politización y corrupción de los altos mandos. El posterior descabezamiento de 12 generales, como una de las primeras medidas del gobierno transitorio de Valentín Paniagua, estuvo dirigido a rescatar la institucionalidad perdida. La comprobada presencia de importantes mandos en actividades tales como tráfico de drogas y armas, ha conducido al gobierno de Toledo a plantear una completa reorganización de las Fuerzas Armadas.

Esta difícil tarea le compete afrontarla al vicepresidente y congresista David Waisman, primer ministro civil que tiene el sector defensa desde su creación en 1987.

Estos acontecimientos remiten a distintas situaciones personales e institucionales que demuestran la caída por colapso del régimen autoritario en Perú, tras la fraudulenta segunda reelección del presidente en mayo de 2000. Se puede afirmar que el descalabro de la dictadura se inició con un video filtrado por integrantes de la Marina de Guerra de Perú al entonces congresista y ahora Ministro de Justicia, Fernando Olivera, en donde claramente se ve a Montesinos sobornando a un parlamentario de la oposición para que transite hacia las filas del gobierno.

El video se hizo célebre ya que con su difusión el, en apariencia, sólido andamiaje de la dictadura, comenzó a resquebrajarse, dejando al descubierto el sistema político - corruptor más grande que se haya conocido en la historia republicana de Perú. Desde ese momento la resistencia ciudadana y la movilización democrática, cívica y popular no cesarían hasta lograr la salida del gobierno y, en consecuencia, contribuirían de manera fundamental a la restauración de la democracia en Perú.

Ahora bien, la crisis pacientemente incubada por el accionar del gobierno entre los años 1996 y 2000 estalló en sus manos y lo inevitable se hizo presente, más rápido de lo que cualquier analista y medio decisor en política hubieran supuesto. Obviamente un proceso tan vertiginoso y con un final tan inesperado sugiere varias interrogantes al momento de empezar el estudio del período: ¿Fue el video la causa principal en el derrumbe de la dictadura? ¿Qué otros factores contribuyeron a la renuncia y fuga del ahora encausado expresidente?. Para dar respuesta a dichas preguntas, es conveniente revisar algunos aspectos de la estrategia seguida por Fujimori y sus socios con el objetivo de garantizar la continuidad autoritaria, la cual, en última instancia, se convirtió en una especie de bumerán que golpeó lo aparentemente más sólido del régimen: la figura presidencial.⁸

⁸ Sobre la importancia de la figura del Presidente en el proyecto autoritario ver Gramponi:2000.

II. Los antecedentes de la (re) elección

El proyecto autoritario elaborado de manera conjunta por Fujimori, Montesinos y el grupo de militares cooptados por el gobierno, se manifestó con claridad a mediados de 1996 cuando el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó la llamada "*Ley de Interpretación Auténtica*" del artículo 112 de la Constitución promulgada en 1993. Este artículo consagraba la reelección presidencial inmediata y había sido impuesto por Fujimori en la carta elaborada por el Congreso Constituyente "Democrático" (CCD). Recordemos que el CCD había sido elegido en noviembre de 1992 luego del golpe de Estado que el presidente, en sociedad con Montesinos y los jefes de las FFAA, entre los que se destacaba el General Nicolás Hermoza, llevó a cabo en abril de ese mismo año. La nueva constitución fue aprobada por una mínima diferencia en el referéndum realizado a fines de octubre de 1993⁶ y con esa "victoria" se legitimó la nascente institucionalidad autoritaria. El régimen entraba en su "*fase fundacional*"⁷, con el consentimiento de la opinión pública nacional y el aval del sistema internacional, aparentando un cariz democrático basado en sucesivos procesos electorales.

Ahora bien, en el proceso de construcción de la legalidad autoritaria, los partidos políticos más importantes, las fuerzas políticas que habían desempeñado el papel más destacado en la política peruana durante la década del ochenta, como Acción Popular, el Partido Aprista Peruano y la Izquierda Unida, se ausentaron de la competencia argumentando falta de garantías para una elección realmente democrática. Este hecho, aun al ser del todo real, no niega la grave crisis del sistema de partidos como síntoma sobre el cual surgieron los independientes y outsiders al comenzar la década del noventa.

En el caso peruano, resulta quizá obvio hablar del progresivo debilitamiento de las organizaciones políticas y partidarias integrantes del sistema durante los años en que estuvo vigente el régimen democrático. En tal sentido y ante la ausencia

⁶ 52.3% por el "sí" y 47.7% por el "no".

⁷ La fase fundacional "... se define en términos de un proyecto nuevo de sociedad, de un modelo de desarrollo, de un nuevo sistema de relaciones sociales y de un modelo político a futuro que se perfiló como el sucesor del régimen..." (Giambrón, 1984:80)

de los más importantes partidos de la oposición, el gobierno obtuvo la mayoría parlamentaria y constituyente sin problemas, lo que le permitió elaborar una constitución a la medida del presidente⁸.

Luego de las elecciones de abril de 1995, en las que Fujimori, con el 64,42% de la votación, derrotó en la primera vuelta a su más cercano competidor, el diplomático Javier Pérez de Cuéllar, el gobierno optó por endurecer su administración con una estrategia diseñada para aniquilar a aquellos que estuvieran en contra del orden autoritario: en lugar de tender puentes hacia la oposición, en un momento de clara legitimidad política y reconocimiento internacional.

Con la "*Ley de Interpretación Auténtica*", promovida por el parlamentario oficialista Carlos Torres y Torres, se "interpretó" la norma constitucional de manera que permitía la reelección inmediata por una sola vez, utilizando un nimio argumento legal: se estableció que Fujimori había sido elegido tan sólo por primera vez con la nueva Constitución en 1995, por lo cual no era aplicable la restricción al entonces presidente y futuro candidato. Así se permitió una nueva reelección. El Tribunal de Garantías Constitucionales declaró la ley como inaplicable y el gobierno respondió a través del Congreso, destituyendo los tres magistrados que votaron en contra de la "*interpretación auténtica*". Se confirmaron así los ímpetus dictatoriales del triunvirato en el poder, Fujimori, Montesinos y el General Nicolás Hermoza, constituido entonces sí como organización dedicada al saqueo del erario público y otras actividades ilegales⁹.

Aquí resulta pertinente introducir brevemente el papel de la Organización de Estados Americanos en la crisis peruana. Sin haber de por medio un acuerdo con los directamente comprometidos en la política peruana, en especial con los partidos de oposición, Fujimori pactó, con la comunidad internacional, un retorno a la democracia, durante la Reunión de Cancilleres de la OEA, realizada en Bahamas a finales de mayo de 1992. En la reunión se acordó que antes de finalizar ese año,

⁸ Taraka, 1998: 201-241.

⁹ Sobre las características mafiosas adquiridas por el Fujimorismo, ver Carlos Iván Degregori (2000), en especial el capítulo 1.

el gobierno de Perú debería organizar elecciones al Congreso, como procedimiento esencial para recuperar la democracia. Sin embargo, no se tocaron temas igualmente importantes en todo proceso destinado a reponer un régimen democrático: la independencia de los poderes, neutralidad de las Fuerzas Armadas, salida de los funcionarios de alto nivel nombrados por decreto gubernamental y medios de comunicación libres.

En clara contravía de la resolución 1080 aprobada en Santiago de Chile en 1991, la cual obligaba a la imposición de sanciones para cualquier quebranto del orden constitucional, lo pactado en la reunión de Cancilleres significó en la práctica avalar la salida golpista como resolución de la crisis peruana. Peor aún, se le asignó a Fujimori, el mismo que había dado el golpe de Estado, la responsabilidad de conducir lo que ingenuamente se planteó como un proceso de restauración de la democracia. Ahora bien, en los meses que siguieron a la "interpretación auténtica", tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público fueron intervenidos mediante sendas comisiones ejecutivas, las cuales se encargaron de nombrar jueces y fiscales adeptos al gobierno. Al mismo tiempo se reorganizó el sistema electoral mediante la creación de nuevas instituciones y la toma, mediante el nombramiento de funcionarios oficialistas, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo tribunal electoral del país. Por último, desde el Estado se puso en marcha la maquinaria reeleccionista destinada a garantizar el triunfo presidencial.

Una prueba de la voluntad gubernamental por afianzarse en el poder fue la organización de un nuevo movimiento político, Vamos Vecino, por parte de personajes muy cercanos al presidente. Entre ellos se destacó el ex ministro de Agricultura, asesor y amigo personal del presidente, Absalón Vásquez, máximo líder del movimiento y quien, a inicios de 2000, se vio involucrado en el escándalo del millón de firmas falsificadas para inscribir la candidatura de Fujimori. La principal tarea que se le asignó a Vamos Vecino fue ganar la mayor cantidad de Concejos distritales y provinciales en las elecciones municipales llevadas a cabo en noviembre de 1998, para después ponerlos al servicio de la reelección. Igualmente, Vamos Vecino le permitía al oficialismo medir fuerzas en el ámbito nacional con "Somos Perú",

movimiento fundado por el exitoso alcalde de Lima y en ese momento alternativa presidencial de la oposición democrática, Aberto Andrade.

De la misma manera, gracias al aparato y los recursos del Estado, Fujimori y Montesinos se dedicaron a la tarea de comprar a todo aquél que pudiera ser utilizado en favor de la candidatura presidencial. Muchos políticos de la oposición, alcaldes y parlamentarios, empresarios nacionales y extranjeros, artistas y medios de comunicación sucumbieron a esta especie de poder neototalitario, que utilizaba los recursos del Estado sin controles de ningún tipo. En aras de continuar la tarea de fundar una nueva sociedad y un nuevo sistema de relaciones sociales, los estrategas del régimen se encaminaron a pervertir tanto la actividad política como la moral de aquellos que desafiaban al orden autoritario.

Como parte de las actividades corruptoras que se pusieron en práctica desde el Estado se destaca lo sucedido con los medios de comunicación, ya que el control de éstos se vio visto un objetivo impostergable en la estrategia por fortalecer el autoritarismo. En la era de la política mediática es posible que desde los medios se construyan o rehagan símbolos, como también se fortalezcan discursos dirigidos al servicio exclusivo de una persona o proyecto político.

En este caso se optó por el envilecimiento de la programación televisiva y radial con la complicidad de los propietarios que, abrumados tanto por una difícil situación económica como los recurrentes chantajes del SIN, terminaron por entregar su independencia informativa. Es por eso que en los más importantes medios de comunicación se tuvo desde 1997 el imprevisto monopolio de la "techno cumbia", la desmesurada presencia de los "talk shows" y "gossip shows", junto al grotesco humor de los "cómicos ambulantes".

No es gratuito que en la campaña electoral de 2000, Fujimori se dedicara con sus candidatos a la vicepresidencia a bailar la cumbia "El baile del chino", o que Laura Bozzo en su programa diario ensalzara la labor de Fujimori y Montesinos, al presentarlos como los salvadores de la patria. Esto sin contar que la mayor parte de

noticieros televisivos transmitían las imágenes de un país donde no había más políticos que Fujimori y sus voceros.

A todo esto se sumó la irrupción de la llamada "prensa chicha", con nombres tan alucinantes como "El Chino", "El Tin" y "La Chuchi", dedicada toda ella a la destrucción sistemática de la dignidad y la moral, no sólo de los integrantes de la oposición democrática, que fueron su objetivo principal, sino de la sociedad en su conjunto. Lo perversamente útil que resulta la manipulación de los medios, se demostró con la formación de una opinión pública excesivamente plebeya durante esta época.

En medio de esta política de construcción de discursos salvacionistas y de manejo de símbolos a través de la manipulación de los medios, Fujimori manifestó, el 28 de diciembre de 1999, su voluntad de ser nuevamente presidente. Esta decisión significaba una "actitud de sacrificio" ya que había "... revisado detenidamente a los otros candidatos" y no encontraba uno solo capaz de "... continuar la obra iniciada 10 años atrás". En ese momento inició el tramo final de la carrera con la intención de mantenerse en el poder sin tomar en cuenta la observación internacional de la que era objeto ni la creciente oposición popular y democrática a su gobierno. Como prueba de lo primero, la Misión de Observadores de la OEA, liderada por Eduardo Stein, se encontraba ya en Lima desde enero de 2000 y, a diferencia de anteriores misiones que se habían hecho presentes en el momento de la elección, estaba dedicada a evaluar el proceso electoral en su totalidad.

Un elemento realmente importante en la configuración de la crisis que finalmente acabaría con el régimen fue la movilización ciudadana y la resistencia cívica. Importantes sectores de la sociedad civil y la oposición política estaban activados desde mediados de 1997, sobre todo cuando el Congreso cercenó el derecho de la ciudadanía a manifestarse sobre una nueva candidatura de Fujimori, luego de promulgado la "interpretación auténtica".

* Degregatop.cit.:97 y ss

El referéndum que se pretendió convocar por iniciativa ciudadana, casi dos millones de firmas recolectadas por la organización Foro Democrático, fracasó en el Congreso debido a la negativa de la mayoría oficialista por darle curso. Obviamente, hubo un previo cambio de la norma constitucional que legitimaba la participación ciudadana a través de los mecanismos de la democracia directa, por una ley en la cual se impuso la aprobación del Congreso para cualquier iniciativa procedente de la sociedad. La respuesta a la decisión del Congreso fue la inmediata movilización, sobre todo de jóvenes estudiantes del país entero y sindicatos de trabajadores, como el de maestros y obreros de construcción civil, en contra de la nueva arbitrariedad impuesta por el régimen.

La falsificación de un millón de firmas con el objetivo de inscribir la alianza electoral PERÚ 2000, fue un hecho que comprometió abiertamente a integrantes del gobierno, parlamentarios en ejercicio y funcionarios de los organismos electorales. Denunciado por el prestigioso diario "El Comercio" en el mes de febrero, la falsificación de las firmas fue otro de los mayúsculos escándalos que estallaron en plena campaña electoral. El caso sacudió los cimientos gubernamentales pero no logró cambiar la actitud de los directamente comprometidos con el delito. Por el contrario, los denunciantes terminaron denunciados, el tribunal electoral aprobó la inscripción de Fujimori y tanto jueces como fiscales venales archivaron los procesos judiciales iniciados contra la ilegal candidatura.

A todo esto se le sumó la activa participación de las Fuerzas Armadas en la campaña electoral, apoyando sin ningún tipo de restricciones la candidatura de Fujimori. Las instalaciones militares fueron utilizadas como locales partidarios y tanto oficiales como soldados realizaron actividades propias de militantes de un partido político. El partido político sustituto entró en escena, aportando la logística necesaria para garantizarle el triunfo a la cúpula gobernante.

III. Adelante con el "Plan B"

Los planes de la dictadura se vieron seriamente afectados cuando se difundieron los primeros resultados de la elección presidencial. Las encuestas a boca de urna dieron casi todas una votación del 49% a Alejandro Toledo, resultado que prácticamente le permitía ganar la Presidencia de la República en primera vuelta con una diferencia de 8 puntos sobre su más cercano competidor, Alberto Fujimori.

Importantes sectores de la ciudadanía celebraron el triunfo de la oposición democrática, pensando que el gobierno se iría reconociendo su derrota. Se equivocaron. Inmediatamente se puso en marcha el plan para cambiar los resultados. Los canales de televisión suspendieron hacia las 4.30 de la tarde toda información referente al proceso electoral. Aparecieron en la escena televisiva viejas películas de Cantinflas y gastados capítulos de "El chavo del ocho", como si la farsa en la cual estaba embarcado el gobierno debiera ser tratada como una comedia.

El control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, y la manipulación del software hizo posible que los resultados se invirtieran hacia las 8 de la noche. Panamericana Televisión, el único canal que siguió transmitiendo resultados, "explicó" el error en que habían incurrido las encuestas a boca de urna al anunciar como triunfador a Toledo, ya que los resultados oficiales daban la victoria a Fujimori, con aproximadamente 9 puntos de ventaja sobre el candidato opositor. Según los voceros del fujimorismo, las encuestas habían errado en casi 18 puntos, en un país donde normalmente se sabía quién era el nuevo presidente al momento de cerrarse las mesas de votación. Esa misma noche se organizó una gigantesca movilización hacia el Palacio de Gobierno; fue duramente reprimida, pero en los días siguientes no cesó, más aún cuando se descubrieron las artimañas gubernamentales para legitimar el fraude.

Los intentos de la ONPE por hacer ganar a Fujimori en la primera vuelta¹⁵, se frustraron debido a la confluencia de múltiples factores. En primer lugar, la oposición

¹⁵ Esta oficina anunció un 49,96% de la votación a favor de Fujimori, según los resultados finales dados casi 10 días después del acto electoral.

de la mayor parte de los partidos políticos y movimientos independientes que habían competido en las elecciones, tales como el Partido Aprista Peruano, Acción Popular, Somos Perú, Solidaridad Nacional y Perú Posible, liderados unitariamente por Alejandro Toledo. En segundo lugar, la inmediata y masiva resistencia ciudadana al fraude electoral y, por último, la categórica declaración del Jefe de la Misión de Observadores de la OEA, quien en su informe calificó el proceso como lleno de irregularidades.

En los días siguientes manifestaron su reprobación la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, exigiendo todos ellos una segunda vuelta entre Fujimori y Toledo. El gobierno, sin mucho margen de maniobra debido a la movilización ciudadana y la presión internacional, se vio obligado a ceder pero persistió en su errada conducta de dirigir el proceso sin cambiar el estado de cosas existente.

Inmediatamente se puso en marcha una nueva estrategia destinada a garantizar el triunfo de Fujimori en la segunda vuelta. La campaña de desprestigio contra Toledo se inició utilizando la "prensa chicha" y los "talk shows" como punta de lanza de la estrategia. Acusaciones de "terrorista" por haber liderado la movilización contra el fraude, de "marido infiel" por, supuestamente, tener una hija fuera del matrimonio y otros calificativos destinados a doblegar no sólo a Toledo sino la oposición democrática en su conjunto estuvieron a la orden del día. Fue la guerra sucia como arma preferida para quebrar voluntades, utilizando los medios de comunicación en tan innoble tarea, pero que al final de cuentas se revirtió en contra de quien diseñó dicha estrategia.

En medio de las calumnias dirigidas contra la oposición democrática, tanto ésta como la Misión de Observadores sugirieron algunos cambios en la organización de la segunda vuelta, con la finalidad de tener mayores garantías para una libre e imparcial competencia electoral. Entre otras cosas, se planteó que evaluadores externos supervisaran el funcionamiento del software utilizado por la ONPE en el conteo de los votos, llevar a cabo una depuración del padrón electoral eliminando a los difuntos y militares inscritos ilegalmente, además de postergar la fecha de la segunda vuelta para el 11 de junio y así tener el tiempo suficiente para completar

los cambios requeridos. Igualmente se sugirió que en la organización del proceso se tuviera la participación de instituciones no adscritas al designio gubernamental, por ejemplo la Asociación Civil Transparencia o la Defensoría del Pueblo.

El gobierno se negó a poner en práctica estas sugerencias argumentando que no podía intervenir debido a la "independencia" y "autonomía" de que gozaban los organismos electorales, los cuales decidían de acuerdo a las leyes establecidas. En consecuencia, Alejandro Toledo renunció a participar y la Misión de Observadores de la OEA decidió retirarse del país. Fujimori quedó como candidato único y, al mejor estilo de los dictadores latinoamericanos de décadas pasadas, "ganó" la segunda vuelta realizada el 28 de mayo de 2000, con cerca del 80% de la votación,

La (re) reelección gozaba de un manto de ilegitimidad que difícilmente podía ser aceptado por cualquier observador o analista político internacional. Pero la OEA, de manera sorpresiva, en su reunión de Cancilleres realizada a comienzos de junio en la ciudad de Windsor, Canadá, decidió avalar la ilegal reelección, a pesar del informe de la Misión de Observadores que cuestionó el proceso electoral iniciado en enero de 2000. Con el decidido apoyo de Brasil, México y Venezuela, el gobierno peruano logró evadir una sanción internacional enmarcada en la resolución 1080, ya que los estatutos de la OEA consideran que este tipo de sanciones debe ser aprobada de manera unánime por los países miembros.

Ahora bien, como una manera de neutralizar la protesta internacional, el gobierno peruano se comprometió a llevar adelante una serie de reformas en el orden jurídico vigente, las cuales debieron ser negociadas con la oposición en una mesa de diálogo auspiciada y supervisada por la OEA. Se conformó la misión, a cargo del Secretario General César Gaviria y el Embajador canadiense Lloyd Axworthy, y desde el 29 de agosto se negociaron con el gobierno medidas destinadas a fortalecer la "institucionalidad democrática"¹¹.

¹¹ La resolución 1080 aprobada en la reunión de cancilleres que tuvo lugar en Santiago de Chile en 1991, estableció que cualquier ruptura del orden constitucional en la región supondría inmediatamente acciones internacionales tendientes a cooperar en el restablecimiento de la institucionalidad perdida. Como no funcionó luego del golpe de Estado dirigido por Fujimori, la opinión de la OEA y sus veedoras nunca influyó realmente en el accionar gubernamental.

Luego de que se conoció la desacertada decisión de la OEA y de que se produjo un acto de subordinación de las FFAA al presidente, antes de su nueva posesión, pocas esperanzas de hacer retroceder al régimen se podían mantener. Pero una pequeña ilusión surgió entre la oposición al momento de conocerse la conformación definitiva del Congreso. El oficialista Perú 2000 no había alcanzado la mayoría parlamentaria en las recientes elecciones. Si la oposición actuaba unida en el Congreso y en la mesa de diálogo auspiciada por la OEA, era posible pensar en una mayoría y con eso forzar cambios importantes en el orden autoritario. Sin embargo, a mediados de junio se inició un proceso que vino a enrarecer aún más el ambiente político y sólo finalizó en los días previos a la (re) toma de posesión.

En la tercera semana de julio, la ciudadanía fue sorprendida por la mayoría que el gobierno había obtenido en el Congreso, producto de un fenómeno que se conoció como el "transfuguismo": congresistas elegidos en las listas presentadas por los partidos de oposición se pasaban al oficialismo sin ningún tipo de explicaciones. Si con la manipulación de los resultados obtenidos en la votación para el Congreso, el gobierno había obtenido 52 parlamentarios de un total de 120, el fenómeno ya mencionado elevó dicha cantidad a 62 y en la elección de las mesas directivas pasaron a ser 75; mayoría absoluta que se demostró más adelante, fue producto de la compra y venta de conciencias. El Congreso quedaba sumamente desprestigiado antes de iniciar sus funciones legislativas y era obvia su transformación en una institución sumisa a la voluntad gubernamental.

IV. Posesión y fuga presidencial

Alberto Fujimori (re)asumió el mando el 28 de Julio de 2000, en medio del aislamiento internacional y la movillización de la oposición democrática. El humo de los gases lacrimógenos utilizados por la policía para disolver las manifestaciones en contra del tercer mandato presidencial y la figura de importantes edificios públicos en llamas, fueron parte de un escenario en el que sobresalía la deteriorada

figura del presidente¹¹. El candidato "derrotado" en la segunda vuelta, Alejandro Toledo, había convalidado a la ciudadanía y partidos de oposición a pronunciarse en contra de la perpetuación de la dictadura, organizando la más grande manifestación social y política que se haya visto en Perú en tiempos recientes.

La "Marcha de los Cuatro Suyos"¹² se ha constituido en el elemento fundamental para entender la derrota política de Fujimori y Montesinos, ya que con esa movilización quedó demostrado el hartazgo de la población hacia una forma de gobierno sustentado en la prepotencia, la arbitrariedad y el despotismo.

En medio de la soberbia y ceguera gubernamental se iba construyendo el escenario de la crisis. Quizá un salto adelante, como ya lo habían hecho antes, podía incrementar la legitimidad del régimen entre los diversos actores comprometidos en la política nacional por lo que, en aras de recuperar su deteriorada imagen internacional, el gobierno recurrió al fácil recurso de mentir sobre un aspecto que directamente comprometía la seguridad en la región.

El 29 de agosto, justo el día en que se iniciaba el diálogo entre gobierno y oposición auspiciado por la OEA, Fujimori, Montesinos y los altos mandos militares y policiales anunciaron el desbaratamiento de una red internacional de traficantes de armas a través de la "Operación Siberia". En esta, según la denuncia presidencial, se había descubierto que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estaban siendo abastecidas de armamento a través de Jordania. La red involucraba altos funcionarios civiles y militares del gobierno de Jordania con lazos en Ucrania. Eso explicaba el hecho que las armas fueran embarcadas en Amman, transportadas en aviones ucranianos y lanzadas en los territorios donde opera la guerrilla más fuerte de Colombia. Los integrantes de la coalición autoritaria argumentaron que gracias al trabajo de inteligencia realizado por el SIN y mandos militares, el gobierno peruano demostraba su compromiso en el combate contra el terrorismo internacional y el narcotráfico en la región¹³.

¹¹ Según se supo que los edificios públicos fueron incendiados por agentes del SIN infiltrados en la movilización.

¹² Los Suyos fueron las regiones en que estuvo dividido el antiguo imperio de los Incas: el Tahuantinsuyo.

¹³ Cáceres 2000:49 y ss.

Pero sucedió lo imprevisible. El gobierno jordano, aliado estratégico de EEUU en asuntos de seguridad en el Medio Oriente, demostró con documentos que las armas habían sido oficialmente vendidas a las FFAA de Perú. La venta se hizo previa informe a la CIA, organismo que en última instancia autorizó la transacción comercial. Las armas no sólo nunca llegaron a las instalaciones militares peruanas sino que se comprobó que, en una irregular triangulación, el Ejército peruano se las había entregado a las FARC. El gobierno de Colombia protestó airadamente y Vladimiro Montesinos, hasta ese momento consensado de la comunidad de inteligencia norteamericana, cayó en desgracia ante sus jefes inmediatos. Precisamente en este episodio es donde hay que ubicar la importancia del video grabado el 14 de septiembre por Fernando Olivero, el cual se constituyó en el detonante de la crisis que terminó por hundir a la dictadura.

En la era de la política mediática, tan bien utilizada por el gobierno para someter política y sociedad a sus intereses, una filmación clandestina y su propagación por el único canal de televisión que mantenía independencia informativa, se constituyó en el acontecimiento que la cambiaría por completo el curso de la historia al proyecto autoritario.

La imagen internacional del gobierno mejoraría si "se lograra una mayoría de 70 y 75 parlamentarios... sólido y pensante..." le argumentaba Montesinos al parlamentario de Perú Posible, Alberto Kouri, mientras le entregaba 15.000 dólares para que cambiara de partido. El video dio la vuelta al mundo e inmediatamente se observaron los pies de barro sobre los que se había levantado la institucionalidad autoritaria. Las diferencias surgidas a raíz de la divulgación del video llevaron a la ruptura del pacto autoritario e inmediatamente se trató de buscar una salida ordenada a la crisis.

El 16 de septiembre, Fujimori convocó a un nuevo proceso electoral en el que no participaría quizá con la esperanza de que al conducir la transición se ahorraría futuros problemas políticos y judiciales. Igualmente ordenó la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional y le exigió la renuncia a Montesinos, sin prever que

la ausencia del asesor lo dejaría como una entelequia en manos de un futuro completamente previsible: su destitución y posterior encausamiento, una vez que el Poder Judicial recuperara su independencia.

Sin Montesinos a su lado, el Presidente quedó vacío, sin dirección, y a partir de ese momento sólo se preocupó por encontrarle una salida a su complicada situación personal. La encontró con la realización de una cumbre presidencial de la AFEC realizada en el Sultanato de Brunei, en donde inició un viaje sin la intención de retornar al país que había gobernado durante 10 años. La última escala de su larga travesía lo condujo al país de sus ancestros donde permanece, gracias a la recientemente adquirida nacionalidad japonesa. El 19 de noviembre de 2000, Desde Tokio y vía fax, renunció a seguir ocupando la Presidencia de la República de Perú luego de haber hecho hasta lo indecible para mantenerse en ella. Dos días después fue destituido en el Congreso por "incapacidad moral" y el régimen político, que tan obstinadamente construyó en los años que se mantuvo al frente del ejecutivo, se desmoronó cual castillo de naipes. Vicepresidentes y ministros renunciaron sin tener al frente la persona que los había nombrado. El soporte político del tercer gobierno de Fujimori, la alianza electoral "PERU 2000" que ya había comenzado a desintegrarse cuando se difundió el video, puso punto final a sus actividades sin dejar rastros de ningún tipo. Si parafraseamos a François Furet podemos decir de la desaparición del fujimorismo como régimen político que:

*"...su rápida disolución no deja nada en pie: ni principios, ni códigos, ni instituciones; ni siquiera una historia... De entre los escombros... no aparecen ni dirigentes dispuestos al relevo, ni verdaderos partidos, ni nueva sociedad, ni nueva economía. Sólo se puede ver una (sociedad peruana) atomizada... (el fujimorismo) termina en una especie de nada..."*¹⁸

Valentín Paniagua fue nombrado presidente provisional organizando su gobierno con personajes procedentes de distintas tiendas políticas. La mesa de diálogo auspiciada por la OEA se desactivó sin haber adquirido real trascendencia en la restauración de la democracia en el Perú. Más aún, la imagen de esta institución

¹⁸ Furet, 1996:10

internacional quedó sumamente deteriorada entre la opinión pública peruana, ya que pasó a ser percibida como encubridora de los desvaríos acontecidos durante la dictadura fujimorista. Los partidos políticos reiniciaron sus actividades con las miras puestas en las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas el 8 de abril de 2001 y Perú inició, una vez más, un proceso destinado a recuperar su democracia.

V. Las medidas del gobierno de transición

El gobierno de transición fue nombrado el 22 de noviembre, luego que Fujimori fuera destituido del cargo. Militante de Acción Popular desde los años sesenta, el presidente provisional Paniagua fue Ministro de Justicia en el primer gobierno de Fernando Belaúnde (1963-1968), Ministro de Educación durante el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985) y Presidente de la Cámara de Diputados cuando aún funcionaba el sistema bicameral, en el mismo período. Luego de haberse retirado de las actividades políticas en 1995 fue uno de los dos congresistas elegidos por Acción Popular en las elecciones de abril de 2000. Su llegada a la Presidencia del Congreso se debió al apoyo de las fuerzas democráticas en las elecciones para renovar la mesa directiva del poder legislativo, luego de la censura a la oficialista Martha Hildebrandt que, como ya se ha visto, pudo ser elegida con los votos del sector político definido como tráfuga.

Paniagua y el gobierno de transición asumieron la responsabilidad de organizar no sólo un nuevo proceso electoral, sino también iniciar el desmonte del régimen autoritario. En aras de garantizar la estabilidad política en el corto plazo, el nuevo gobierno se conformó con militantes de distintos grupos políticos y personalidades independientes. Entre éstos se destacó el nombramiento de Javier Pérez de Cuéllar, ex Secretario General de la ONU, como Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores. Otra decisión importante fue el nombramiento como

Ministro del Interior de Antonio Ketin Vidal Herrera, reconocido oficial de la Policía Nacional que organizó y dirigió la captura del jefe máximo de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

En un contexto marcado por el colapso de la dictadura y la incredulidad de la población ante la magnitud de los delitos cometidos por el fenecido régimen, el gobierno transitorio tuvo que afrontar desde sus inicios una serie de problemas que necesitaban solución inmediata. Dada la premura de tiempo, se abocó a enfrentarlos contando con el apoyo de los partidos democráticos representados en el Congreso e importantes sectores de la sociedad civil. En primer lugar, había que reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas y Policiales acabando con la corrupción y politización de los altos mandos. La inmediata destitución de 12 generales del Ejército e igual número de altos oficiales en la Marina de Guerra y Fuerza Aérea, se hizo con el objetivo de comenzar a eliminar las redes que Fujimori y Montesinos habían organizado para mantener a las FFAA al proyecto autoritario. El alto grado de ilegitimidad de las instituciones militares, producto de su involucramiento en las actividades ilegales dirigidas desde las más altas esferas del gobierno anterior, hizo posible que su capacidad de respuesta a la decisión gubernamental fuera mínima.

En segundo lugar, reconstruir las instituciones encargadas de la administración de justicia en el país, las cuales habían sido igualmente politizadas y corrompidas desde el poder ejecutivo y el SIN. El Poder Judicial y el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) fueron intervenidos luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y sus más altos dignatarios pasaron a ser nombrados directamente por el Presidente, en calidad de "provisionales", hasta que se reestructurara la administración de justicia en el país. El Consejo Nacional de la Magistratura, organismo encargado del nombramiento y remoción de jueces y fiscales, fue desde tan aciaga fecha reemplazado en la práctica por el Presidente y el jefe en la sombra del SIN. La Corte Suprema, las Cortes Superiores y los juzgados de primera y segunda instancia pasaron a estar conformados por vocales y jueces "provisionales", sujetos al poder autoritario, sin ninguna capacidad para decidir de acuerdo a lo que la constitución y las leyes establecían.

El accionar de la dictadura sobre el Poder Judicial se reafirmó con leyes que mantuvieron su vigencia hasta hace poco, tales como la 26546 de 1995 por medio de la cual se creó la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, ente que sirvió para controlar esta institución utilizando magistrados cercanos al régimen. Igualmente, con la ley 26623 de 1996 se creó el Comité de Coordinación Judicial y se dictó la reorganización del Ministerio Público. Con esta ley se entregó, además, la titularidad tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público a sendas comisiones ejecutivas, cuyos miembros fueron designados de acuerdo a los intereses del ejecutivo. Por último, con la ley 26898 de 1997 se homologó a los magistrados provisionales con los titulares, lo cual le permitió a la dictadura contar con el número de electores suficientes para nombrar presidente y vicepresidente del Jurado Nacional de Elecciones.

El gobierno provisional, con el apoyo del Congreso, decidió acabar con el entramado jurídico elaborado por el régimen autoritario. Empezó por nombrar nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y, con la puesta en funcionamiento de dicha institución, se pasó a destituir jueces y fiscales que habían sido designados de manera irregular. La depuración se inició con la salida de 11 vocales de la Corte Suprema y la reorganización de varias cortes superiores, sobre todo la de Lima. Igualmente, se reintegró en sus funciones a los tres miembros de la Corte Constitucional que habían sido destituidos por su oposición a la "Ley de Interpretación Auténtica". La renuncia de la cuasi eterna Fiscal de la Nación y Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público durante los años del fujimorismo, Blanca Nérida Colán, fue aceptada por el Congreso, e inmediatamente, se le inició el juicio constitucional por incumplimiento de funciones.

Recordemos que Colán fue nombrada por Fujimori luego del golpe y sucesivamente ratificada en el cargo por la mayoría oficialista en el Congreso. Se le acusa, entre otras cosas, de haber ordenado el archivo de las causas iniciadas contra Vladimiro Montesinos en 1998, año en el que se descubrieron los millonarios ingresos del asesor presidencial. Esto último hizo posible que se le abriera un proceso

penal y, al momento de escribir estas líneas, la ex fiscal de la Nación se encuentre detenida en situación de inculpada.

En tercer lugar, el gobierno de transición se propuso recuperar la credibilidad de los organismos electorales en aras de garantizar una elección limpia y transparente. Se cambió casi en su totalidad al personal que había llevado adelante el fraude en abril de 2000, nombrando como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales al especialista Fernando Tuesta. Igualmente se solicitó la presencia de asesores externos para el manejo del soporte informático a utilizarse en el conteo de votos y, además, se aceptó la presencia de observadores nacionales y extranjeros durante las pruebas y conteo final. Hoy en día se plantea la necesidad de unificar el JNE, ONPE y RENIEC, como una medida destinada a impedir que el sistema electoral pueda ser nuevamente manipulado¹⁶. Por último, se restableció el distrito electoral múltiple, lo cual significa que los departamentos pueden elegir sus representantes luego de tener durante 3 años el distrito electoral único.

En cuarto lugar, el gobierno de Valentín Paniagua decidió que el Perú volviera a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cuando en septiembre de 1999 la CIDH le pidió al gobierno peruano que realizara un nuevo juicio a cuatro terroristas chilenos integrantes del MRTA, la dictadura asumió el pedido como una injerencia inadmisibles en los asuntos internos de un país soberano. Distorsionando la idea de soberanía, el Estado peruano se retiró de la CIDH, con lo que generó un nuevo enfrentamiento con instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de leyes y tratados internacionales de las que siempre se había sido parte.

El gobierno de transición hizo posible el regreso de Perú a la CIDH, retomando la legislación internacional vigente en cuestiones relacionadas al respeto de los derechos humanos. Como parte de esa voluntad por restablecer la normalidad democrática acogidos a las leyes internacionales, derogó la ley de amnistía

¹⁶ Con la legislación vigente, el JNE es el máximo tribunal constitucional electoral, la ONPE se encarga de organizar las elecciones y la RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, lleva el padrón electoral. Anteriormente todo el proceso estaba en manos del JNE.

dada en el Congreso por la mayoría fujimorista en junio de 1995, aceptando la resolución de la CIDH que declaró dicha ley como inaplicable. Recordemos que por la ley de amnistía salieron libres militares comprometidos en serias violaciones a los derechos humanos, los integrantes del paramilitar "Grupo Colina", quienes habían llevado a cabo las tristemente célebres matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.¹⁷

Quinto, la lucha contra la corrupción sólo podía legitimarse si los cabecillas de la organización delictiva que gobernó Perú eran sometidos a la justicia. Por tal motivo, la captura y regreso al país de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori se constituyeron en prioridad para la policía y justicia peruanas. Con el ex Presidente surgieron problemas de carácter legal, debido a que de manera rápida y sorpresiva logró la nacionalidad japonesa, lo cual impide por ahora su extradición a Perú, ya que las leyes del Japón prohíben la entrega de connacionales a la justicia de otros países. Montesinos, en cambio, no tuvo el tiempo suficiente para arreglar su situación y por lo tanto se vio obligado a buscar refugio en algún lugar donde pudiera ser recibido sin correr el riesgo de ser detenido. Pensó en Venezuela, dado que algunas de las personas que hoy ocupan puestos públicos importantes en ese país, habían disfrutado del apoyo de Fujimori y Montesinos cuando se asilaron en Perú, luego de participar en el intento de golpe de Estado de noviembre de 1992. La protección inicial de la que gozó se fue perdiendo conforme se hacía más evidente su presencia en ese país. Cuando la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, se hizo más fuerte y la policía peruana había logrado dar con su paradero, las autoridades venezolanas no tuvieron más opción que "capturarlo" y entregarlo a sus colegas de Perú.

Tales fueron las principales tareas a las que se vio abocado el gobierno de transición en los 8 meses que duró. Otros aspectos igualmente importantes para la buena marcha del Estado, como el diseño de una política económica alternativa a la entonces vigente, no tuvieron el tiempo suficiente como para ponerse en

¹⁷ Por estas masacres, Fujimori ha sido recientemente acusado en el Congreso por crímenes contra la humanidad debido a que estuvo enterado de las acciones de ese grupo paramilitar. Si la acusación en la Corte Suprema de Perú prospera, es posible que su caso sea visto por un tribunal penal internacional.

práctica. En esta fase de transición democrática, es loable la labor de los partidos políticos democráticos ya que demostraron un grado de madurez poco conocida como también el desprendimiento necesario para hacer avanzar la transición sin sobresaltos. Los partidos comprendieron la necesidad de unirse para enfrentar el desmonte del régimen autoritario y las latentes amenazas a la frágil democracia peruana, unidad que no les impidió participar con candidatos propios en las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas el 8 de abril de 2001.

VI. Elecciones 2001: el temer de una vuelta al pasado

A comienzos de 2001, Perú se encontraba de nuevo agitado por un proceso electoral destinado a elegir un nuevo Presidente de la República, dos vicepresidentes y 120 parlamentarios. En un ambiente caracterizado por los apuros del gobierno de transición para reinstitucionalizar el país, los partidos políticos definieron sus candidatos presidenciales y los integrantes de sus respectivas listas parlamentarias, como también forjaron alianzas de distinto índole. En organizaciones como Perú Posible y Frente Independiente Moralizador (FIM) no hubo mayores sorpresas. Alejandro Toledo era el candidato de Perú Posible y contaba con un amplio favoritismo al momento de iniciarse la campaña.

Dos razones explican esta inicial aceptación ciudadana: haber sido, por un lado, el candidato que unificó el voto opositor, logrando derrotar a Fujimori en la primera vuelta electoral de 2000 y, por otro, el principal dirigente en la movilización ciudadana contra el ilegal tercer mandato del entonces presidente. Además, se había ganado la adhesión de Acción Popular, partido de larga tradición en la política peruana y del cual procedía el presidente del gobierno de transición.

Fernando Olivera, líder y fundador del FIM y quien proyectó el video del soborno, se postuló como candidato presidencial, en renuncia a una exitosa trayectoria parlamentaria de 15 años, primero como integrante de la Cámara de Diputados y luego como miembro del Congreso unicameral durante el fujimorismo, cargos

desde los que Olivera forjó su carrera política como un abanderado en la lucha contra la corrupción. En la fase terminal del régimen jugó un destacado papel como integrante de la oposición democrática. Para las elecciones llamó como parte de su fórmula presidencial a otra de las víctimas políticas del fujimorismo, el ex Alcalde de Lima y exitoso empresario televisivo Ricardo Belmont. Este último es recordado por ser uno de los primeros "outsiders" en la política latinoamericana, ya que se encargó de vencer a los candidatos de los "partidos tradicionales" en las elecciones para la alcaldía de Lima en noviembre de 1989.

El Partido Popular Cristiano y su candidata Lourdes Flores decidieron formar una coalición a la cual denominaron Unidad Nacional. La coalición incorporó al Movimiento Renovación de Rafael Rey, movimiento "independiente" considerado parte de la oposición oficialista durante el fujimorismo, a sectores conservadores y laicos de la Iglesia Católica pertenecientes al Opus Dei, como también a personalidades independientes, como el ex Secretario General de la Confederación General de Trabajadores de Perú y ex militante del Partido Comunista, José Luis Risco. No hubo sorpresas con la designación de Lourdes Flores como candidata presidencial del bloque centro derechista y la lista parlamentaria se conformó sobre la base de la representatividad e importancia de los partidos y movimientos integrantes de la coalición. Hay que resaltar el temprano apoyo que recibió esta candidatura de los más importantes gremios empresariales de país, lo cual, en cierto momento de la campaña, le resultó perjudicial.

La mayor sorpresa vino por el lado del Partido Aprista Peruano (PAP) que inscribió como candidato al expresidente Alan García Pérez. Luego de un desastroso gobierno entre 1985 y 1990 y vivir casi 9 años en el exilio a raíz de la ruptura institucional acontecida en abril de 1992, Alan García regresó al Perú convertido en el candidato presidencial del partido más antiguo de Perú. Luego de que la Corte Suprema aceptara la sugerencia de la CIDH para levantarle los juicios que tenía pendientes, debido a la prescripción de los delitos que se le imputaban, García volvió a la política nacional con la esperanza de recuperar el tiempo perdido.

En la acera opuesta, los herederos del fujimorismo no hicieron el mínimo esfuerzo por apropiarse de las escasas simpatías que mantenía el fenecido régimen autoritario. Carlos Baloña, Ministro de Economía en la fase terminal del régimen, se arriesgó como candidato a través de un alucinante movimiento al que llamó Solución Popular, pero del cual no tomaron parte ni las huestes de Vamos Vecino ni los movimientos políticos fundados por Fujimori en la década pasada: Cambio 90 y Nueva Mayoría.

Hubo dos candidaturas que se inscribieron en las fechas legalmente establecidas pero posteriormente se retiraron, al ver que no estaban siendo favorecidas por los sondeos de opinión. Por un lado, Jorge Santisteban de Noriega, ex Defensor del Pueblo, con Causa Democrática y el apoyo de Somos Perú del alcalde de Lima, Alberto Andrade; esta candidatura no logró coger vuelo a pesar del prestigio adquirido por Santisteban en la lucha contra la dictadura. Por otro lado, el antiguo Director del Instituto Peruano de Seguridad Social, Enrique Castañeda con su partido Solidaridad Nacional, personalidad democrática vapuleada moralmente por la prensa al servicio del régimen durante la anterior campaña y de la cual no pudo recuperarse en términos electorales. Se tuvieron otras candidaturas presidenciales de partidos como Renacimiento Andino y Todos por la Victoria, que al final obtuvieron resultados irrelevantes.

VII. La campaña y los resultados

Si los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril de 2000 estuvieron marcados por el fraude y la manipulación gubernamental, los resultados obtenidos un año después en la primera vuelta se han caracterizado por la sorpresa: producto de la resurrección política del Partido Aprista Peruano y su candidato Alan García. El PAP logró pasar a la segunda vuelta, con el 25,75% de los votos válidos, dejando en el camino a Lourdes Flores, quien se había constituido como la más seria competidora de Alejandro Toledo durante los momentos iniciales

de la campaña electoral. Este último, como era previsible, ganó la primera vuelta pero con el 35,87%, resultado por debajo de lo esperado en sus prelin. La candidata de Unidad Nacional alcanzó el 24,50% y Fernando Olivera obtuvo el 11%. ¿Qué explica el éxito de Alan García, la caída en su votación de Alejandro Toledo y la derrota de Lourdes Flores?

La candidatura de Alan García creció gracias a la incertidumbre que empezó a rodear las de Toledo y Lourdes Flores. Los ataques políticos y personales que éstos emplearon desde los momentos iniciales de la campaña, llevó a que muchos electores vieran en esa competencia una vuelta al pasado prefujimorista, un escenario en el cual la confrontación democrática había sido percibida como lugar de dirimencia de asuntos personales. Las rencillas discursivas entre los entonces principales candidatos, donde además confluyeron elementos de carácter étnico y clasista, fueron muy bien aprovechadas por García ya que éste pudo organizar su campaña con un discurso político supuestamente conciliador de las diferencias. Transmitiendo seriedad y ponderación en sus intervenciones, hizo olvidar, sobre todo en la generación de jóvenes votantes, lo catastrófico de su gobierno.

Por otro lado, tanto Toledo como Flores no se distanciaban demasiado de la política económica vigente desde 1990. Ambos manifestaban su agrado por el modelo neoliberal en el contexto de la globalización y pensaban que aquél se había retrasado en sus objetivos, por no haberse impulsado las reformas de 'segunda generación' entre 1996-1999. Si bien es cierto que en sus planes de gobierno y discursos de campaña ambos candidatos hablaban de la necesidad de recuperar los aspectos sociales del modelo, ninguno manifestaba distancias fundamentales con lo establecido en el Consenso de Washington. Como parte de su discurso social, tanto Toledo como Flores, hablaron de la necesidad de acabar con la política asistencialista que tan buenos réditos le había generado a la dictadura, para empezar a generar empleo productivo en los sectores de la economía más afectados por la recesión. Pero el número de puestos de trabajo que se crearían durante su futura gestión fue tan desmesurado, que difícilmente podía ser aceptado por los electores, sobre todo de los sectores medios.

García, en cambio, organizó su propuesta económica alrededor de la necesidad de rebajar las tarifas de los servicios públicos o el precio de las medicinas. Un programa económico lleno de generalidades, pero que se hizo mucho más accesible al electorado de bajos ingresos.

Otro elemento que quizá permita entender la cerrota de Lourdes Flores es la identificación de esta candidatura como una especie de "fujimorismo encubierto". Mientras Toledo y García establecieron claras distancias con personajes vinculados al destituido gobierno, Unidad Nacional hizo lo contrario en aras de un proyecto que posibilitaba la redención de los que habían servido a la dictadura. En primer lugar, llevó como candidato a la primera vicepresidencia a Drago Kistic, académico que había formado parte de la comisión que negoció el cuestionado acuerdo de paz con Ecuador. En segundo lugar, incorporó en la coalición al Movimiento Renovación, que siempre fue percibida como la oposición oficialista durante el régimen autoritario, ya que en asuntos trascendentales para la política nacional sus integrantes se alinearon con las posiciones del gobierno. En tercer lugar, los vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica como el Opus Dei, los cuales estaban muy desacreditados ante la opinión pública por haberse manifestado, por ejemplo, a favor de los excesos cometidos por el Estado durante la guerra interna¹⁴. En cuarto lugar, la incorporación en sus listas parlamentarias de personajes anteriormente relacionados con el aparato reeccionista, sobre todo prefectos, alcaldes y concejales en departamentos y provincias del interior del país. Por último, el apoyo de los más importantes gremios empresariales del país, los mismos que habían reconocido casi que inmediatamente la fraudulenta reelección de Fujimori en mayo de 2000.

El descenso en la votación de Alejandro Toledo es posible de entender si consideramos algunos factores que jugaron en su contra. Ya se consideraron la confrontación discursiva con Lourdes Flores y sus cercanías con el modelo económico neoliberal. De igual importancia fueron los componentes étnicos y clasistas que

¹⁴ El actual Cardenal de Perú y miembro del Opus Dei, Juan Luis Cipriani, llegó a declarar una vez que los derechos humanos son "una cojudez".

incorporó en su discurso, algo que pocas veces se ha visto en la historia de Perú, salvo durante la campaña electoral de 1990 cuando Fujimori derrotó a Mario Vargas Llosa. Toledo le apostó a su origen campesino, pasado popular y rasgos indígenas como elementos definitorios en su legitimidad política; amenazó a los sectores altos y medios del electorado con la recuperación de un pasado milenarista y glorioso, el gobierno de los Apus¹⁵, como lo dijo su esposa en un discurso de campaña dirigiéndose a "los blancos y pituquitos de Lima", y se distanció de los que en determinado momento lo apoyaron como alternativa de la oposición democrática. El racismo en dos sentidos, los que irresponsablemente plantearon que había llegado la hora de excusar a los blancos del poder, y los que se oponían a la posibilidad que un "cholo" gobernara el Perú, llevó a que la primera se convirtiera en un factor que poco contribuyó a la candidatura de Toledo¹⁶.

En medio de estos errores de campaña y excesos discursivos de Toledo y Flores, reapareció en la escena política un Alan García muy distinto al que había gobernado el Perú entre 1985 y 1990. Su regreso como político serio y maduro, distante de los extremismos demagógicos en que habían caído sus competidores, manejando una propuesta de unidad democrática sustentada en el acuerdo y cooperación entre los distintos actores, planteando medidas de política económica viables en el corto plazo, llevaron a que su candidatura creciera en medio de la incertidumbre que generaron las otras. El aprismo reformado apareció como una opción política que pretendía rescatar las opciones de centro e izquierda, permitiéndole canalizar los votos de las diversas clases populares y de jóvenes con un futuro incierto. Además, el cerrado respaldo de su partido y la organización nacional con el que éste siempre ha contado, hicieron posible que pasara a la segunda vuelta llegando a ser una seria amenaza a las intenciones de Toledo de ser presidente del país.

La segunda vuelta electoral supuestamente, debió haber sido un mero trámite para Alejandro Toledo, ya que se pensó en la posibilidad de recibir el inmediato respaldo de los partidos que habían ocupado el tercer y cuarto lugares en la primera

¹⁵ En la tradición cultural quechua, los Apus son las deidades protectoras de los gobernantes.

¹⁶ En una entrevista transmitida en todo el país, el padre de Lourdes Flores calificó a Toledo como el "quiénido de Harvard". Hashe anecdótico que registró el grado de racismo aún existente en el Perú.

vuelta. Tanto los integrantes de Unidad Nacional como el Frente Independiente Moralizador, son organizaciones que históricamente han mantenido serias diferencias con el Partido Aprista y el expresidente Alan García, lo cual permitía pensarlos como aliados naturales de Perú Posible. Además, sin tener ya que lidiar con las otras candidaturas, Toledo podía dedicarse a refrescar la memoria del electorado sobre el desastroso gobierno de García, lo cual supuestamente le daría la oportunidad de captar los votos del amplio espectro de electores que había optado por Olivera y Flores en la primera vuelta y que sumaban el 35% de la votación nacional. Trabajar en la campaña con la simple amenaza de un retorno de García a la presidencia, podía ayudar a canalizar las antipatías que el expresidente despertaba en importantes sectores de la ciudadanía. Se equivocó.

La candidatura de Alan García adquirió un nivel de apoyo que ni él mismo se imaginó. Luego de una ardua campaña electoral con debate presidencial de por medio, Toledo ganó pero por una diferencia que no sobrepasó los 5 puntos. La campaña para la segunda vuelta electoral demostró las ansias de poder en los predios toledistas, propiciando la aparición de graves errores. Por ejemplo, afirmaciones que lo presentaban como víctima de persecución política durante los años de la dictadura y que, luego se comprobó eran falsas. La denuncia del candidato favorito sobre un posible secuestro, llevó a una investigación periodística que demostró más bien las inclinaciones por las fiestas del ahora presidente. La negativa a practicarse la prueba de ADN para descartar de manera definitiva la paternidad de una niña, y exámenes médicos que mostraban que Toledo en algún momento de su vida reciente había consumido cocaína, jugaron también en su contra. Igualmente, su persistencia en los excesivos ofrecimientos sobre generación de empleo y aumento de sueldos contribuyeron a que la incredulidad entre los electores se ampliara. A última hora logró el apoyo de Fernando Olivera, pero por manifestarse de manera muy tardía no logró aumentar significativamente el caudal electoral de Toledo.

Lourdes Flores optó por negarle su apoyo proclamando la neutralidad en el proceso y dejando a sus seguidores en libertad de votar. Posteriormente se proclamó como oposición democrática, reiterando un error que cometieron los partidos en

la década del ochenta: ser oposición al gobierno recién elegido con la intención de canalizar el probable descontento ciudadano hacia una futura candidatura presidencial. El APRA y Alan García se quedaron solos en la contienda, lo cual indujo al candidato a tender puentes mucho más amplios a los escépticos electores. A pesar de los esfuerzos realizados, ni el PAP ni García pudieron revertir el mayoritario sentimiento anti alanista que aún permea importantes sectores de la sociedad peruana. Esto fue lo que en última instancia definió la segunda vuelta a favor de Toledo.

Resulta evidente que las identidades políticas se mantienen difusas y por lo demás ambiguas, lo cual en el corto plazo impide el fortalecimiento de los partidos como elementos mediadores entre el Estado y la sociedad. Junto a esto se observa que por ahora no existen aportes serios en la reconstrucción de un sistema político que sustente su funcionamiento en las lealtades hacia las instituciones, sino que más bien se ha optado por mantener y, en algunos casos, ahondar la imagen del líder como principal gestor de la acción política. Esto es más evidente en los casos del Partido Aprista y Perú Posible, organizaciones que cuentan con las mayores responsabilidades en la reconstrucción de la democracia.

VIII. Los desafíos para la democracia en Perú

Resulta difícil pensar en una rápida recuperación de la confianza ciudadana en el restaurado régimen democrático, más aún cuando se tienen de por medio serios problemas políticos, económicos y sociales. El gobierno de Alejandro Toledo para legitimarse requiere afrontar con responsabilidad los desafíos; después de todo, el mismo Presidente señaló, en una entrevista publicada en el diario El Tiempo, que "...está condenado a no fracasar". Ahora bien, ¿cuáles son las principales amenazas a la gobernabilidad democrática? ¿Qué problemas deben ser afrontados de manera inmediata por el nuevo gobierno?

En primer lugar, la herencia del decenio fujimorista en cuanto a la manipulación y destrucción de los principios éticos y valores democráticos. El período en mención se caracterizó por las ilícitas e ilegítimas actividades del líder autoritario y sus socios, actividades destinadas, sobre todo, a destruir las instituciones y pervertir la acción política como los mecanismos más idóneos para perpetuarse en el poder. El aniquilamiento de los principios éticos en la conducción del Estado trajo consigo el derrumbe moral de gran parte de la población, lo cual ha afectado seriamente los vínculos más elementales de la organización social. La reconstrucción del tejido social es un imperativo moral, competencia no sólo del nuevo gobierno sino de todos aquellos que están comprometidos con la democracia en el Perú.

Un segundo desafío, que no se puede separar del primero, es eliminar los restos de la sociedad mafiosa que organizaron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en las diversas instituciones y niveles de la administración pública. La red de corrupción organizada desde el Estado se encargó de quitarle la correspondiente autonomía a las instituciones del régimen democrático, lo cual obliga a que ésta sea pronto recuperada en aras de restablecer el tan necesario equilibrio de poderes. Algo parecido sucede con las Fuerzas Armadas. La necesaria subordinación al orden constitucional tiene que darse sobre la base de la lealtad militar a las instituciones democráticas. Un primer paso ha sido el nombramiento de un civil como ministro de defensa y la reorganización de los altos mandos, pero hay motivos para pensar en la insuficiencia de estas primeras medidas. El descubrimiento de un video en donde aparece prácticamente toda la oficialidad de los institutos armados firmando una carta de sujeción al régimen autoritario, crea demasiadas suspicacias alrededor de una rápida recuperación del profesionalismo militar.

La situación económica del país es quizá el más grande desafío que tiene el gobierno de Toledo. Las demandas empresariales para superar la crisis económica pasan por el diseño de una política que reactive el aparato productivo, el cual se encuentra atrapado en una recesión que dura casi tres años. La prolongada duración del período de decrecimiento económico ha comenzado a ser identificada como una depresión, lo que crea, por lo tanto, mayores problemas para diseñar una política

reactivadora en los medios decisivos. Aunado a lo anterior, es necesario llevar adelante programas destinados a la reducción del desempleo y subempleo. Eso supone la generación de nuevos puestos de trabajo y la elevación de los ingresos de los trabajadores involucrados tanto en el sector formal como en el informal de la economía. La población asalariada ha sido de las más afectadas en su bienestar por los 10 años que ha durado el ajuste económico, pero también fue duramente golpeada por el desconocimiento de casi todos sus derechos sociales y laborales. En el caso de Perú, con la implantación de una economía de libre mercado, se puso en práctica la definición elaborada por García Canclini: consumidores del siglo XXI, ciudadanos del siglo XVI.²¹

Las demandas son muchas y la actual capacidad del Estado para satisfacerlas realmente escasas, más aún cuando se observan en el horizonte regional y mundial serias convulsiones económicas. A manera de ejemplo se puede señalar como probables impedimentos a las promesas de Toledo en su fase de candidato, la crisis argentina y la desaceleración de la economía en Estados Unidos y los países asiáticos.²² Los flujos de inversión extranjera hacia las denominadas "economías emergentes" no tendrían por qué variar en su destino en los próximos años. América Latina, salvo Brasil y México, no ha sido el lugar preferido por las grandes empresas multinacionales para realizar inversiones en gran escala. Quizá en estos momentos sea más necesario que nunca la noción de "autoayuda" en las relaciones económicas internacionales, como el mecanismo más idóneo para alcanzar objetivos económicos de mediano y corto plazo.

La democracia en Perú requiere de un tratamiento especial. Su consolidación exige que los principales actores políticos y sociales "hagan de la necesidad virtud", abandonen las posiciones maximalistas y busquen el consenso para resolver las diferencias de tipo político o de manejo económico. El Poder Judicial se debe abocar a la administración de justicia sin criterios políticos, sancionando con rigor a los responsables de la ola corruptora que se apoderó de país en los últimos años.

²¹ García Canclini, 1995.

²² Al momento de terminar este artículo se produjeron los atentados terroristas contra EEUU, o cualquier otro país, lo que generó aún más incertidumbre en la economía mundial manifestada, por ejemplo, en la inicial caída de las principales bolsas de valores del mundo decimonoveno.

El legislativo debe adecuar sus funciones a los nuevos tiempos, buscando la eficiencia en su desenvolvimiento y contribuyendo a que la práctica política recupere parte del prestigio perdido. Las Fuerzas Armadas nunca más deben prestarse a las maniobras de oscuros personajes o asesores sin responsabilidad política. La recuperación de su profesionalismo y espíritu corporativo es tarea inmediata tanto del gobierno como de los oficiales institucionalistas.

Su misión, igualmente, debe adecuarse a un contexto en el cual ya no existen amenazas externas e internas. De no alcanzarse algunos de los objetivos mínimos aquí planteados, no es del todo descartable la reaparición de tendencias autoritarias que hagan del posible fracaso gubernamental, el medio para insertarse en la conciencia ciudadana y sea necesario, al cabo de unos cuantos años, volver a escribir sobre el proceso de recuperación de la democracia en el Perú.

Bibliografía

- COTLER, Julio. 2000. "La gobernabilidad en el Perú: entre el autoritarismo y la democracia" en COTLER, Julio y GROMPONE, Romeo: "El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario". IEP ediciones, Lima.
- DEGREGORI, Carlos Iván. 2000. "La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos". IEP ediciones, Lima.
- FURET, François. 1996. "El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX". Fondo de Cultura Económica, México. Primera reimpresión.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor. 1995. "Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización". Editorial Grijalbo, México.
- GARRETÓN, Manuel Antonio. 1984 "Dictaduras y democratización". FLACSO, Chile.
- GROMPONE, Romeo. 2000. "Al día siguiente: el fujimorismo como proyecto inconcluso de transformación política y social" en COTLER, Julio y GROMPONE

Romeo. "El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario". IEP ediciones, Lima

- OLANO, Aldo. 1999. "Las relaciones cívico militares y la caída de la democracia en el Perú". En: OASIS 98, Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIFE), Universidad Externado de Colombia.
- TANAKA, Martín. 1996. "Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú". IEP ediciones, Lima.